



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: LUIS RAFAEL MÚNERA BARBOSA
Demandados: ACP COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.
Radicado: 05001 31 05 014 2021 00133 01
Sentencia: S-223

AUTO

En atención a la escritura pública 1281 del 2 de junio de 2023 allegada al expediente, en la que se otorga poder especial para representar a PORVENIR S.A. a la sociedad GODOY CÓRDOBA ABOGADOS S.A.S., se le reconoce personería como apoderada judicial a la Dra. JULIANA ARAQUE GUIROZ, T.P. 293.693 del C. S. de la Judicatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el **recurso de apelación interpuesto por la ACP COLPENSIONES, y en grado jurisdiccional de consulta a favor de esta misma**, en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín el día 03 de marzo de 2023.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

PRETENSIONES:

LUIS RAFAEL MÚNERA BARBOSA demandó a PORVENIR S.A. y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS-, y se disponga su retorno a COLPENSIONES sin solución de continuidad y además de que no contó con una reasesoría antes de cumplir los 52 años de edad, debiendo COLPENSIONES reconocer la pensión de vejez. En consecuencia, pretende se ordene a PORVENIR S.A. a trasladar todos los aportes de la cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos financieros, y sin ningún descuento por cuotas de administración a COLPENSIONES, quien debe reactivar la afiliación, recibir los aportes, y reconocerle la pensión de vejez desde la fecha en que acreditó los requisitos legales, junto con los intereses moratorios o en subsidio la indexación.

Subsidiariamente pretende que al no obtener reasesoría antes de cumplir los 52 años de edad, se condene a PORVENIR S.A. a reconocer, a título de indemnización de perjuicios, como mesada pensional, el valor equivalente a lo que este hubiera recibido en el RPM.

LOS HECHOS:

Expone como fundamento de sus peticiones que nació el 5 de noviembre de 1956; que se afilió a Instituto de Seguros Sociales e hizo aportes entre el 4 de abril de 1978 y el 31 de julio de 1995, para un total de 756 semanas cotizadas; que se trasladó a PORVENIR S.A. el 6 de junio de 1996, en donde ha permanecido hasta la fecha; que cotizó en el RAIS 838 semanas, y en toda su vida laboral posee 1.594

semanas. Aduce que PORVENIR S.A. al momento del traslado, no le suministró la información necesaria, referente a los requisitos para pensionarse como tampoco se le dio una reasesoría justo antes de cumplir los 52 años de edad; que PORVENIR S.A. el 18 de febrero de 2021, le realizó una simulación pensional en donde se le dijo que ostentaría la pensión de garantía mínima, y además se le dijo que su traslado no es procedente; que solicitó a COLPENSIONES la ineficacia de traslado, la cual fue negada, y que su pensión sería mayor si estuviera afiliado a COLPENSIONES.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:

Al contestar, COLPENSIONES acepta la fecha de nacimiento del demandante, su afiliación al ISS, el traslado al RAIS y la solicitud de traslado radicada ante Colpensiones; sobre los demás hechos indica que no le constan por tratarse de situaciones ajenas a su conocimiento. Se opuso a las pretensiones de la demanda y en especial a reconocer la pensión de vejez. Como excepciones propuso carga dinámica de la prueba, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, improcedencia de intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, devolución de cuotas y gastos de administración, seguros previsionales, rendimientos y ahorros voluntarios debidamente indexados, buena fe, improcedencia de condena en costas y compensación.

PORVENIR S.A. en su contestación, expone que no le consta la edad como tampoco la afiliación al ISS; que el demandante diligenció formulario de afiliación a PORVENIR S.A. el 6 de junio de 1996; que cotizó al RAIS 888.2 semanas y que actualmente cuenta con 1.657 semanas de cotización; que al actor si se le brindó toda la información pertinente para su traslado, tanto como ventajas o desventajas; y que es cierta la solicitud elevada a este fondo privado, pero la manifestación del demandante frente a la misma es descontextualizada. Por último, señala que no le consta la solicitud elevada a COLPENSIONES. Se opuso

a las pretensiones de la demanda, ya que al actor se le brindó información de manera clara, precisa, veraz y suficiente de acuerdo con las disposiciones legales. Como excepciones propuso prescripción, prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

Mediante sentencia del 03 de marzo de 2023, el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, 1) **DECLARÓ** la ineficacia de la afiliación del demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad administrado por PORVENIR S.A.; 2) **CONDENÓ** a la AFP PORVENIR S.A. a trasladar con destino a COLPENSIONES, el valor de los dineros de la cuenta de ahorro individual del actor, incluyendo los rendimientos financieros y las comisiones de administración, que incluyen lo pagado por seguros previsionales y la garantía de la pensión mínima, a partir del 1° de agosto de 1996; 3) **ORDENÓ** a COLPENSIONES a reactivar la afiliación del demandante al régimen de prima media, sin solución de continuidad, incluyendo las semanas de cotizaciones sufragadas en el RAIS; 4) **ORDENÓ** a PORVENIR S.A. a comunicar dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, el contenido de la decisión a la Nación Ministerio de Hacienda y Crédito Público Oficina de Bonos Pensiones, para los efectos correspondientes; 5) **CONDENÓ** a COLPENSIONES a reconocer y pagar en favor del demandante, dentro de los 4 meses siguientes al recibo de los dineros por parte de PORVENIR S.A., la pensión de vejez en los términos del artículo 33 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9° de la ley 797 de 2003, la cual deberá ser calculada de conformidad con los parámetros establecidos en el artículo 21 de la ley 100 de 1993 y la tasa de reemplazo del artículo 34 de la misma codificación, a razón de 13 mesadas anuales, sin perjuicio de los incrementos legales, teniendo en cuenta como fecha de disfrute a partir de la última semana finalmente cotizada al sistema; 6) **CONDENÓ** a COLPENSIONES a pagar la indexación de las mesadas objeto de reconocimiento que

hagan parte de su retroactivo pensional; 7) **AUTORIZÓ** a COLPENSIONES a descontar del retroactivo reconocido, el valor de las cotizaciones en salud; y 8) **CONDENÓ** en costas a PORVENIR S.A.

DEL RECURSO DE APELACIÓN:

Inconforme con la anterior decisión, la apoderada de COLPENSIONES presentó recurso de apelación parcial manifestando, en primer lugar, frente a la ineficacia, que esta entidad se debe entender como un tercero ajeno al negocio jurídico, por lo que solicita que conforme a las sentencias de la Corte Suprema de Justicia como lo son la SL4964-2008, SL4989-2008 y SL1688-2019, se ordene a PORVENIR S.A. que traslade todos los conceptos descontados y que éstos sean debidamente indexados.

De igual forma, la sentencia será revisada en grado jurisdiccional de consulta en los aspectos desfavorables para COLPENSIONES.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

Dentro del término del traslado concedido a las partes, la apoderada de la parte demandante presentó alegatos de conclusión a través de los cuales expuso que se debe confirmar la sentencia de primera instancia, ya que, al momento de efectuar el traslado inicial de régimen pensional, no le brindó una asesoría clara, completa y eficiente, la cual le permitiera tomar una decisión consiente sobre las implicaciones que en su futuro pensional acarrearía dicho traslado, lo cual ha sido reiterado por la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia. Señala además que se debe confirmar la pensión reconocida, pues tal y como lo verificó el juzgado de primera instancia, se encuentran demostrados los requisitos para gozar de la misma.

Finalmente, la apoderada de la AFP PORVENIR S.A. presentó sus alegatos de conclusión solicitando se revoque la sentencia de primera

instancia, toda vez que no existen razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual, pues la decisión de la parte actora se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza, y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley para la fecha de afiliación al RAIS, como es el deber de información establecido para dicha época de traslado, contando con varias oportunidades para trasladarse, y la sola motivación de la parte actora para su traslado es netamente económica. Manifiesta además que la prueba para la fecha de traslado era el formulario de afiliación, el cual fue aportado sin tener que acreditar otros requisitos, y además debe tenerse en cuenta que el actor no cumplió con el deber de diligencia y cuidado. Indica por otro lado, que se deben revocar las condenas impuestas, pues no se deben incluir las cuotas de administración como tampoco los seguros previsionales. Y que no se debe condenar en costas por obrar siempre de buena fe y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes para la época.

CONSIDERACIONES:

Se procede a desatar el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES en contra de la sentencia de primera instancia e igualmente conocer del proceso vía grado jurisdiccional de CONSULTA en favor de esta misma entidad conforme a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 14 de la Ley 1149 de 2007.

Entre los hechos que a esta altura del proceso han quedado plenamente acreditados, se tiene que: *i)* LUIS RAFAEL MÚNERA BARBOSA nació el 5 de noviembre de 1956; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional ante el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES el 4 de abril de 1978, y cotizó a este fondo un total de 756 semanas¹; *iii)* y que el 6 de

¹ Historial laboral aportada por COLPENSIONES de folios 27 a 31 de la contestación.

junio de 1996² suscribió el respectivo formulario de vinculación a la AFP PORVENIR S.A. entidad en la que se encuentra actualmente vinculado. Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993³, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

² Folio 19 de la demanda

³ Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*"Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador."*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:

"Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar

entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica."

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación, es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y
- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por el actor, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente el demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, este traslado a PORVENIR S.A. fue realizado directamente por la empresa donde laboraba sin consultarles nada al respecto, diligenciando el formulario con los datos personales. Señala que nunca lo visitaron asesores de PORVENIR S.A. como tampoco recibió información de su empleador en dicho momento. Y manifiesta que nunca le informaron los requisitos para pensionarse en el RAIS.

De lo antepuesto no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo anterior permite dar aplicación al artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *"La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá*

realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”.

En lo que tiene que ver con el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 13 de la Ley 100 del 1993, no podrá salir adelante, toda vez que frete a este tema la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito “... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

Conceptos a trasladar

De otro lado, en cuanto a decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás conceptos, basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667,

rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*“Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional.”*

Se advierte igualmente que la orden a PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva **indexación**, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, lo que además es procedente en tanto el proceso también se conoce en CONSULTA a favor de esta entidad.

En ese aspecto, dicha Corporación ha ordenado tal **indexación** y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349 del 28 de julio de 2021, SL359-2021 y SL3394-

2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que “... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar.” Por tal razón, se deberá **ADICIONAR** este concepto.

Pensión de vejez

Finalmente, no existe duda alguna en cuanto a que, según lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, el demandante acredita todos los requisitos para tener derecho a la pensión de vejez, pues al haber nacido 5 de noviembre de 1956, significa que los 62 años de edad los tiene acreditados desde el mismo día y mes del año 2018.

De otro lado, de acuerdo al reporte de cotizaciones a PORVENIR S.A. con fecha de generación del 12 de julio de 2022, se evidencia que el actor acreditaba, para ese entonces, un total de 1.657 semanas cotizadas en toda su vida laboral, las que sin duda resultan superiores a las 1.300 exigidas en aquella disposición legal, por lo que la decisión del Juez de primera instancia de reconocer la pensión de vejez se encuentra ajustada a derecho.

Sin embargo, en lo que tiene que ver el disfrute de la prestación, aplica la necesidad ineludible en casos como este de acreditar la desafiliación del sistema, y en este punto se precisará la presente decisión. Incluso, el fundamento para adoptar esa determinación no son solo los artículos 13 y 35 del decreto 758 de 1990 que hacen referencia a la causación y disfrute de la pensión de vejez, sino también que esas cotizaciones que se vienen realizando pueden tener incidencia en el valor final de la

prestación que se va a reconocer, en los términos del artículo 21 de la ley 100 de 1993.

Lo anterior debido a que es claro que de la historia laboral se desprende que en la actualidad continúa realizando cotizaciones, de igual manera, el demandante lo corroboró en su interrogatorio de parte, por lo que le corresponderá a COLPENSIONES, cuando tenga los dineros de la cuenta individual que el demandante posee en PORVENIR S.A., liquidar y comenzar a pagar la prestación una vez se acredite el retiro, teniendo en cuenta para ello lo dispuesto en el artículo 21 de la ley 100 de 1993, esto es con el promedio del IBL de toda la vida laboral o de los últimos 10 años efectivamente cotizados, según le sea más favorable; confirmando igualmente la indexación del retroactivo pensional si existiere y los descuentos respectivos en salud.

En consecuencia, la decisión de primera instancia deberá ser **CONFIRMADA y ADICIONADA.**

Sin costas en esta instancia.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Medellín, el día 03 de marzo de 2023, pero la **ADICIONA** en el sentido de ordenarle a la AFP PORVENIR S.A., que los conceptos de comisiones por administración, aportes para la garantía de pensión mínima y los seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, deben incluir la respectiva INDEXACIÓN, y la **PRECISA** en punto a que para

el disfrute de la prestación, el demandante deberá acreditar la desafiliación del sistema pensional.

Sin costas en esta instancia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **61dfdcffe5f5957a265b6ac4204608d0cb638e5a69f102d8d58a6dca3169f5fe**

Documento generado en 17/08/2023 03:12:35 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>